

Comentarios

Monseñor Romero ha vencido al poder

Hace veinticinco años una bala asesina terminó con la vida de un hombre que asumió como causa suya la defensa de la vida de los más pobres de El Salvador. Defender a los pobres, denunciar la represión de la que ellos eran objeto cuando reclamaban su derecho a una vida digna, decir que la violencia estructural —la que genera pobreza, exclusión y marginación para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas— era la causa principal de las demás violencias, no podía ser bien visto por quienes se beneficiaban de la violencia estructural y por quienes —cuerpos de seguridad, ejército y escuadrones de la muerte— habían hecho del terrorismo estatal y privado el principal instrumento para mantener privilegios mal habidos.

El poder no podía tolerar que el arzobispo de San Salvador se atreviera a semejante afrenta contra sus intereses y la forma violenta de protegerlos. De un jerarca de la Iglesia católica —en concreto, del arzobispo de San Salvador, en los momentos en que Monseñor Romero asumió ese cargo— se esperaban otras cosas: espiritualismo, piedad religiosa y, sobre todo, connivencia con el poder. Monseñor Romero —tal como quedó reflejado en su *Diario personal*— fue un sacerdote de una intensa espiritualidad y de una profunda piedad religiosa, pero —tal como quedó plasmado en su apostolado, sus homilías y sus cartas pastorales— no tuvo connivencia alguna con el poder. En 1978, formuló con contundencia su posición ante el poder: “la Iglesia no está en la tierra para privilegios, para apoyarse en el poder o en la riqueza, para congraciarse con los grandes del mundo. La Iglesia no está siquiera para erigir grandes templos o monumentos. La Iglesia no está en la tierra para

enseñar sabiduría de la tierra. La Iglesia es el reino de Dios que nos está dando precisamente esto: filiación divina” (homilía del 30 de julio de 1978).

El poder en El Salvador creía tener en Óscar Romero a un aliado. Fue por eso que sus agentes —la oligarquía, los militares y prominentes miembros de la jerarquía eclesial— se empeñaron en verlo investido como arzobispo de San Salvador. Era —a sus ojos— una apuesta preferible a Monseñor Arturo Rivera Damas y, de paso, una oportunidad para desandar el camino de compromiso social, iniciado por el arzobispo saliente, Monseñor Luis Chávez. Hacia los años setenta, el poder en El Salvador tenía un temor: que el incipiente compromiso social, suscitado en un sector de la Iglesia católica, no solo se extendiera en su seno, sino que se contaminara de componentes políticos de carácter contestatario.

Hasta entonces, el poder había celebrado las actividades caritativas de la Iglesia; incluso había hecho generosos donativos para sus obras sociales. Pero la formación de cooperativas y la posterior formación de organizaciones campesinas eran un exceso. Más que un exceso, era una verdadera afrenta que sacerdotes como Rutilio Grande se insertaran en Aguilares para dar concreción a una pastoral de acompañamiento a las organizaciones campesinas. Y es que en experiencias como la de Aguilares se impuso una lectura de los problemas socioeconómicos de la gente —pobreza, exclusión, desempleo, analfabetismo, enfermedades, etc.— como problemas que requerían una solución política, entre las cuales la concientización y la organización popular eran prioritarias.

El sector más joven y dinámico de la Iglesia católica se encamina en la dirección trazada, no sin dificultades y conflictos, por Rutilio Grande. Esto aterró al poder, porque con ello comenzaba a resquebrajarse la alianza (oligarquía-militares-Iglesia), forjada desde inicios del siglo XX, gracias a la cual riquezas y privilegios se acumularon en pocas manos, a costa de la miseria de la mayoría de salvadoreños. Para el poder, esas tendencias perversas dentro de la Iglesia se incubaron durante el arzobispado de Monseñor Chávez, quien no tuvo el coraje de erradicarlas a tiempo. Eran unas tendencias que amenazaban con consolidarse aún más con un obispo como Monseñor Rivera. En consecuencia, lo aconsejable era la vuelta a lo tradicional, es decir, a un ejercicio pastoral no solo centrado en lo espiritual y lo piadoso, sino reactivo a cualquier contaminación de lo religioso por lo político. Desde este punto de vista, Monseñor Romero era una buena opción.

En efecto, en los años previos a su nombramiento como arzobispo, Monseñor Romero se había destacado por el rechazo a contaminar la fe con la política: no solo había mostrado su preocupación por la "instrumentalización" de aquella por ésta, sino también su disposición a enfrentarse a quienes, dentro de la Iglesia, se prestaran a esa instrumentalización. Aquí no se equivocaron quienes, desde el poder, apostaron por Monseñor Romero. Sin embargo, se equivocaron en otras cosas. Creyeron que Monseñor Romero era su aliado, es decir, alguien dispuesto a defender y a compartir sus privilegios y riquezas. No cayeron en la cuenta de que el arzobispo era, ante todo, un hombre de Iglesia, esto es, fiel a la institución, a la tradición eclesial, a sus documentos fundacionales y a sus lineamientos conciliares. Confundieron tradición con tradicionalismo, entendido este último como aceptación pasiva de lo transmitido, generación tras generación.

Monseñor Romero había hecho suya la tradición de la Iglesia, pero no era un tradicionalista. Para él, la tradición eclesial, en especial la de los padres de la Iglesia, era una fuente de iluminación permanente, lo cual suponía una relectura y una reactualización de sus enseñanzas. Precisamente, por su fidelidad a la Iglesia y a lo mejor de sus tradiciones y enseñanzas, Monseñor Romero no podía ser un aliado del poder. Esas tradiciones y enseñanzas lo ponían en la antípoda del poder: lo ponían del lado de los pobres, los marginados y los violentados en su dignidad; lo ponían del lado de quienes

luchaban por la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos.

Monseñor Romero no estaba en contra de la contaminación de la fe por la política, porque fuera un aliado de la oligarquía y el ejército, sino porque era un hombre de Iglesia y creía que esa contaminación iría en detrimento de esta última. Como hombre de Iglesia que era, tenía claro que la mayor gloria de Dios es que el hombre viva (san Irineo de Lyon) y, en tal sentido, no le eran ajenas las preocupaciones sobre la injusticia, prevaeciente en El Salvador de su época. Es así como en el editorial "Trabajar por la justicia" pudo escribir lo siguiente:

trabajar por la justicia es deber y atributo de todos los ciudadanos y se debe comenzar por la propia casa. Cumplir los deberes de Estado. Ser buen esposo. No echar hijos al mundo para abandonarlos... Dar cada cual lo suyo. Contribuir los trabajadores al progreso nacional. Dar los patronos salarios justos y prestaciones sociales que les permitan vivir con la dignidad de personas. Trabajar por la justicia en la sociedad. Contribuir cada ciudadano con todas sus capacidades para la promoción y el mejoramiento de sus hermanos, con sus recursos económicos, culturales o espirituales. Trabajar por la justicia. Practicar una sensibilidad social que nos obligue a preocuparnos por nuestros prójimos, convencidos de que "todo hombre es nuestro hermano". De lo contrario, no seremos sinceramente cristianos ni podemos pretender que amamos la paz, la justicia y la caridad... Si de veras queremos paz, trabajemos todos, tú y yo, no solamente ellos, por promover la justicia" (*Orientación*, 3-9 de enero de 1972).

Monseñor Romero estaba más cerca de monseñor Chávez de lo que creyeron tanto quienes, desde el poder, lo consideraban un aliado como quienes, desde la oposición intraeclesial, lo consideraban un obispo conservador. Unos y otros se equivocaron, aunque a quienes les resultó más cara su equivocación fue a la oligarquía y al ejército. Una vez nombrado arzobispo, monseñor Romero fue más claro que nunca que él no era ni había sido nunca uno de los suyos; fue más claro que nunca que, para él, la pobreza, la injusticia y la marginación de la mayoría de salvadoreños eran un asunto que competía, de suyo, a la Iglesia. Había quienes, dentro de la Iglesia, compartían esta convicción con monseñor Romero, pero habían ido por delante de él: estaban conscientes de que la

pobreza, la exclusión y la marginación de las mayorías no podrían ser erradicadas sin la participación organizada de esas mayorías, una participación que, necesariamente, debería revestir un carácter político.

Dicho de otra forma, cuando monseñor Romero inició su magisterio como arzobispo de San Salvador, ya había quienes, dentro de la Iglesia, habían asumido que la fe debe “contaminarse” de política, si quiere ser una fe que ilumine los problemas concretos de los salvadoreños. No de cualquier política, sino de aquella que se decantase hacia formas de participación organizada, que permitieran a las mayorías defender sus derechos humanos fundamentales. Quienes sostenían estas posturas, plantearon un verdadero problema a monseñor Romero, un problema que lo acompañó a lo largo de sus tres años al frente del arzobispado de San Salvador. No se trata solo de un problema teórico (o doctrinal), sino de un problema práctico: sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas y delegados de la palabra insertos en la dinámica de la organización popular eran perseguidos, acosados, torturados y asesinados. Junto con ellos también eran perseguidos, acosados, torturados y asesinados campesinos, obreros, estudiantes y obreros organizados.

En la práctica, la Iglesia no era ajena a la política. Antes, la política del poder no lo había sido; durante los primeros meses del magisterio de monseñor Romero al frente del arzobispado, tampoco la política contestataria de izquierda. ¿Qué postura tomar ante el desafío que planteaba la política contestataria de la izquierda? ¿Cuál debía ser la relación entre fe y política? Estas dos interrogantes y sus respuestas permiten vislumbrar una importante evolución en monseñor Romero, desde su nombramiento como arzobispo —el 23 de febrero de 1977— hasta su asesinato —el 24 de marzo de 1980—. Y es que una de las claves de interpretación de esa evolución consiste en leerla como una aceptación progresiva (y siempre problemática) de la idea de que la solución de los problemas estructurales del país —entre ellos, la violencia estructural, que genera pobreza, exclusión y marginación— es una solución no solo socioeconómica, sino también política.

Esta evolución es, ciertamente, doctrinal y se expresa en el cambio de una fórmula muy querida por monseñor Romero. Si para san Ireneo de Lyon “la gloria de Dios es que el hombre viva” (*Gloria Dei vivens homo*), para él “la gloria de Dios es que el pobre viva” (*Gloria Dei vivens pauper*). Pero



también se trata de una evolución práctica, tal como se manifiesta en su acercamiento a quienes, dentro y fuera de la Iglesia, promueven la organización popular y en su predicación pastoral. Lentamente, con incertidumbres y tanteos, monseñor Romero se acercó a la política, en lo que esta tiene de oferta para la construcción de una sociedad más racional, justa y equitativa. En el proceder de este acercamiento a la política son cruciales los asesinatos de sacerdotes queridos —el primero de ellos, Rutilio Grande (12 de marzo de 1977)—. Después vinieron Ernesto Barrera, Octavio Ortiz, Alfonso Navarro, Alirio Napoleón Macías, Rafael Palacios..., así como religiosas, religiosos, catequistas y delegados de la palabra. Estas y otras muertes confirmaron a monseñor Romero no solo que el camino seguido por la Iglesia que él representaba era el correcto, sino también que la violencia padecida por la Iglesia era una violencia que, en principio, estaba dirigida al pueblo salvadoreño. Es por eso que llegó a decir que el conflicto no era entre la Iglesia y el gobierno, sino entre este último y el pueblo, y que la Iglesia era víctima de persecuciones y asesinatos, por su opción preferencial por los pobres. En definitiva, La Iglesia es perseguida porque quiere liberar a los hombres desde la fe. Para monseñor Romero, Rutilio Grande expresa mejor que nadie el carácter de esa fe que libera.

La liberación que el Padre Grande predicaba —dijo en la homilía de la misma exequial de

Rutilio Grande, el domingo 14 de marzo de 1977—, es inspirada por la fe, una fe que nos habla de una vida eterna, una fe que ahora él con su rostro levantado al cielo, acompañado de dos campesinos, la ofrece en su totalidad, en su perfección: la liberación que termina en la felicidad en Dios; la liberación que arranca del arrepentimiento del pecado, la liberación que [se] apoya en Cristo, la única fuerza salvadora; esta, es la liberación que Rutilio Grande ha predicado, y por eso ha vivido el mensaje de la Iglesia. Nos da hombres liberadores con una inspiración de fe, y junto a esa inspiración de fe... Hombres que ponen a la base de su prudencia y de su existencia, una doctrina: la doctrina social de la Iglesia... Eso es lo que predicó el padre Rutilio Grande; y porque muchas veces es incomprendida hasta el asesinato, por eso murió el padre Rutilio Grande. Una doctrina social de la Iglesia, que se le confundió con una doctrina política que estorba al mundo (homilía del 14 de marzo de 1977).

Por otra parte, los temores de una instrumentalización de la fe por la política nunca abandonaron a monseñor Romero. Pero, una vez al frente del arzobispado, ese temor ya no se tradujo, como antes, en una actitud de rechazo hacia quienes pretendían vincular fe y política, sino en una actitud de acercamiento y diálogo crítico con ellos. Este diálogo y este acercamiento permitieron a monseñor Romero, a medida que avanzaba su magisterio, ir madurando su propia postura, la cual se puede resumir como sigue: la fe no puede ser instrumentalizada, cuando se hace cargo de los problemas que aquejan a los seres humanos, es decir, la fe que se encarna en la historia.

Un evangelio que no tiene en cuenta los derechos de los hombres, un cristianismo que no construye la historia en la tierra —sostuvo en 1977—, no es la auténtica doctrina de Cristo, sino simplemente un instrumento del poder. Lamentamos que algún tiempo nuestra Iglesia también haya caído en ese pecado; pero queremos revisar la actitud y, de acuerdo con esa espiritualidad auténticamente evangélica, no queremos ser juguetes de los poderes de la tierra, sino que queremos ser la Iglesia que lleva el evangelio auténtico, valiente de Nuestro Señor Jesucristo, aun cuando fuera necesario morir como él (homilía del 27 de noviembre de 1977).

Una fe encarnada en la historia no se subordina a la política, sino que dialoga con ella y la ilumina;

más aún, se convierte en la instancia necesaria para evitar que desemboque en una de sus peores perversiones: convertir los medios en fines. Este era el planteamiento abstracto; en la práctica, ello significaba: reconocer la especificidad de lo político como un ámbito privilegiado desde el cual propiciar los cambios socioeconómicos necesarios; reconocer y defender el derecho de las mayorías a organizarse; orientar e iluminar críticamente el quehacer de las organizaciones populares; denunciar los atropellos de los aparatos represivos del Estado y los escuadrones de la muerte en contra de las organizaciones populares y sus miembros; y ofrecer una evaluación crítica de aquellas formas organizativas —por ejemplo, los grupos político-militares— que, sin ser estrictamente populares y profesar el ateísmo, vinculaban sus acciones con los intereses y las aspiraciones de campesinos, obreros y estudiantes. Respecto de unas y otras, monseñor Romero planteó —en su Tercera Carta Pastoral, *La Iglesia y las organizaciones populares*, una posición de principio:

Apoyo al derecho humano de asociación, sobre todo cuando en las circunstancias del país, se considere la “organización popular” como uno de los medios más importantes para la implantación de la justicia; apoyo también a la libertad que cada uno tiene en sus opciones concretas de modo que a nadie se pueda obligar a inscribirse en determinado grupo; apoyo a los objetivos justos de cualquier organización; respeto a la autonomía del quehacer político y social de las organizaciones así como ella, la Iglesia, también exige a cualquier persona u organización que le respete la propia autonomía de su naturaleza y de su misión y que, por tanto, no se la use o subordine a ninguna finalidad de la organización. También tiene la Iglesia el deber y el derecho a ejercer ante cualquier organización, aunque no se profese cristiana, su función profética de animar lo que esté conforme con la revelación de Dios en el evangelio y denunciar todo lo que esté en desacuerdo con esa revelación y constituya pecado del mundo.

En los tres años de su magisterio arzobispal, monseñor Romero maduró su concepción de las relaciones entre fe y política. Después de mucha reflexión —tamizada por las experiencias de muerte, que se sucedían dentro y fuera de la Iglesia— pudo convencerse de que la pobreza y la injusticia no podían superarse sin un componente político, es

decir, sin la participación organizada de los sectores populares. Fue su fidelidad a lo mejor de la tradición cristiana lo que le permitió aceptar la necesidad de la política —de una política alternativa a la ejercida desde el poder del Estado— para propiciar los cambios sociales impostergables para El Salvador. Si antes había sido esa misma fidelidad la que lo hacía oponerse a cualquier contaminación entre fe y política, ahora era esa misma fidelidad la que le obligaba a reconocer la importancia de lo político para que la fe y sus exigencias no se quedaran flotando en el vacío.

Las exigencias de la fe —justicia, igualdad, esperanza y caridad— reclaman unas mediaciones políticas determinadas. Estas mediaciones reclaman una fe que las oriente y las cure del peligro de convertirse en un absoluto. Esta fue la convicción que arraigó en monseñor Romero, en sus tres años de magisterio arzobispal. No solo tuvo la honestidad de aceptarlo, sino el coraje de asumir, en todas sus consecuencias, los desafíos que se desprendían de esta opción. Esto lo acercó cada vez más al pueblo salvadoreño, hasta convertirlo en su pastor más querido, respetado y venerado. El poder, de considerarlo un aliado, pasó a verlo como un enemigo, como el responsable de las peores calamidades que amenazaban con poner fin a su mundo de privilegios, prepotencia y ostentación.

El poder vio la predicación de monseñor Romero como una traición, sin darse cuenta que el arzobispo no podía traicionarlos, porque nunca había sido uno de ellos. Ni oligarcas, ni militares cayeron en la cuenta de que el “sentir con la Iglesia” de monseñor Romero no era una consigna de última hora, sino una convicción hondamente arraigada en su vida sacerdotal. Quizás, aunque no lo hubieran considerado un traidor, igual lo habrían asesinado. Sin embargo, la venganza del poder no se consumó solo en su asesinato; parte consustancial de ella fue la impunidad de sus asesinos y la preten-

sión de borrarlo de la memoria de los salvadoreños. A veinticinco años de su muerte, los responsables del crimen que aun siguen con vida no han sido juzgados ni castigados como se merecen. El principal responsable del mismo —el ya fallecido Roberto D'Aubuisson— es celebrado por los poderosos como un héroe, a quien se debe rendir tributo. Hasta aquí, el poder se ha salido con la suya. Pero donde ha fracasado es en su objetivo de borrar a monseñor Romero de la memoria de los salvadoreños.

Año con año, desde los trágicos acontecimientos que empañaron sus honras fúnebres, hasta el día de hoy, siempre ha habido salvadoreños que han mantenido vivo su recuerdo. No ha sido la mayoría del pueblo la que ha rendido homenaje a su pastor asesinado, pero sí su sector más crítico y valiente. En cada aniversario, esos salvadoreños han dado testimonio de su agradecimiento a monseñor Romero. En la conmemoración de los veinticinco años de su asesinato han vuelto a sacudir a la sociedad salvadoreña, adormecida por el sopor de la publicidad y el consumismo. La han sacudido y la han movilizado, por lo menos de forma parcial, para rendir el debido homenaje a quien no dudó en dar su vida por ella. En este veinticinco aniversario del asesinato de monseñor Romero, la sociedad salvadoreña ha comenzado, al apropiarse del legado de su arzobispo martirizado, a recuperar su dignidad. Este es el triunfo de monseñor Romero sobre el poder. Está vivo en la memoria de su pueblo. Es aliento y esperanza para quienes trabajan por construir una sociedad más justa e incluyente. Monseñor Romero ha vencido al poder. Lo ha vencido porque el poder lo quería muerto y olvidado, y él vive y tiene presencia en los anhelos, sueños y esperanzas de los mejores hijos e hijas de El Salvador.

LUIS ARMANDO GONZÁLEZ
Director del CIDAI